

DECLARACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

28 de septiembre de 2025

DECLARACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

El Partido Popular, reunido en Murcia a través de su presidente nacional y de los presidentes y representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas que abajo figuran, MANIFIESTA lo siguiente:

1. Constatamos la ausencia de estabilidad, el deterioro institucional y el desgobierno en los que el Ejecutivo central ha sumido a la Nación. La constante sucesión de episodios sin precedentes ha instalado a España en una **situación de anomalía política y democrática a la que no podemos acostumbrarnos, y que debe resolverse con la convocatoria de elecciones generales a la mayor brevedad.**
2. **Afirmamos que la debilidad del Gobierno está arrastrando a la Nación.** Sin Presupuestos Generales del Estado desde 2022, sin una mayoría parlamentaria sólida y con la legislatura menos productiva, la gestión se resiente gravemente y los problemas reales de los españoles se relegan. Mientras esto ocurre, se sigue avanzando en pactos con los separatistas que en la práctica suponen iniciar una mutación constitucional por la puerta de atrás, así como en una deriva autoritaria que está desembocando en la anulación de las Cortes Generales, la ofensiva contra el Poder Judicial, la colonización de empresas públicas, la intervención de las privadas, la desautorización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o la instrumentalización de las Fuerzas Armadas.
3. **Lamentamos que los grandes retos pendientes en España se están agravando** por la inacción y el sectarismo imperantes. Las dificultades en el acceso a la vivienda, la pérdida del poder adquisitivo de los españoles, la elevada presión fiscal o el descontrol de la inmigración irregular son la constatación más evidente, y a ello se suman constantes negligencias gubernamentales con dañinas secuelas para el Estado de Derecho, la unidad nacional, la estabilidad institucional, el papel de España en el mundo, la libertad y la prosperidad de todos, y la seguridad jurídica y en las calles.
4. Constatamos que nada se soluciona porque **la corrupción que rodea al Gobierno, al partido y al entorno personal del presidente del Ejecutivo lo ocupa prácticamente todo.** Sus problemas judiciales conforman la atmósfera habitual y lamentablemente condicionan de forma permanente la agenda política. Es insostenible la continuidad de un Gobierno que la Justicia señala por el amaño de contratos, el cobro de mordidas, los servicios de prostitución contratados con dinero público o el uso de la Moncloa como centro de negocios. El día a día se ve comprometido por los numerosos sumarios judiciales que pesan sobre el círculo personal y político más próximo a Pedro Sánchez y sus intentos de taparlo como sea, incluso a costa de un deterioro institucional sin precedentes.

5. **Condenamos la deriva autoritaria que ha abrazado el Gobierno central en pleno contra las instituciones que informan, investigan y enjuician su corrupción.** Reiteramos que la separación de poderes es pilar básico de cualquier democracia sana, así como la libertad de prensa. Tribunales, jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad y periodistas deben seguir trabajando con libertad e independencia, sin verse perseguidos por nadie.
6. **Advertimos del total sometimiento del Congreso de los Diputados a los intereses del Ejecutivo.** El bloqueo sistemático de las leyes aprobadas en el Senado son fruto de un obstruccionismo que la Cámara Baja practica para no hacer evidente que en materias clave existe una mayoría alternativa a la que todavía sostiene a Pedro Sánchez.
7. **Rechazamos el uso de las instituciones del Estado para fines exclusivamente partidistas** y su instrumentalización para acabar con la alternancia política. Desde los Ministerios convertidos en órganos de oposición a las Comunidades gobernadas por el PP hasta los medios de comunicación públicos como RTVE y entes públicos absolutamente colonizados, es alarmante la falta de neutralidad de instituciones que son propiedad de todos los españoles. La regeneración institucional es una tarea urgente que acometeremos desde el Gobierno, conforme a los compromisos adquiridos en nuestro Plan de Calidad Institucional elaborado en 2023, que será actualizado y ampliado.
8. **Lamentamos que la acción gubernamental se haya visto reducida a dividir a los españoles**, en un desesperado intento porque ello tape los escándalos que asedian al Ejecutivo. Quien renuncia a cualquier objetivo común, pacta con partidos como Bildu, y tiene como único propósito enfrentar al pueblo ya no es su digno representante. Un buen gobernante no levanta muros, sino que tiende puentes.
9. **Denunciamos el trato arbitrario del Gobierno central a las Comunidades Autónomas.** Desde la Ley de Amnistía que dio origen a la presente legislatura nacional, no han cesado los agravios entre españoles, incluso en áreas de crucial trascendencia como el reparto de menores no acompañados o el cupo separatista. Nos oponemos a este trato asimétrico impulsado únicamente para satisfacer al separatismo, renunciamos a participar de este tipo de chantajes, y volvemos a reivindicar la igualdad de todos los españoles ante la ley. Reiteramos nuestra tajante oposición a la ruptura de la caja común y la Agencia Tributaria, y la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica y local, que permita prestar los servicios públicos en las mejores condiciones.
10. **El Partido Popular se reivindica como única alternativa de Estado a esta situación nacional** y se compromete a tenerla lista para que, tras las próximas elecciones generales, sean éstas cuando sean, España cuente con un Gobierno estable y coherente, un proyecto reformista de libertad y prosperidad, y una hoja de ruta para restaurar la concordia entre españoles.

11. La Ponencia Política aprobada en nuestro XXI Congreso Nacional, celebrado en julio de 2025, será la guía para reparar España, un proceso que necesariamente habrá de empezar por la **aprobación y desarrollo de un Plan de Regeneración Institucional que impida la apropiación personal o partidista de las instituciones que son de todos y la mutación constitucional en marcha.**
12. Nos comprometemos a garantizar el buen uso de los recursos públicos que los españoles aportan a través de sus impuestos. Las cesiones al separatismo, ingentes cantidades destinadas a miles de asesores o a la mera propaganda, u otras muchas partidas de nula utilidad para los españoles tienen como objetivo pertrechar al PSOE en el poder, pero no el bienestar de las personas. **El cambio incluirá un giro a los presupuestos estatales** para atender necesidades reales, como la financiación de la Ley ELA o de la Dependencia, la ampliación de las plantillas de médicos y el conjunto de los profesionales sanitarios y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o la gratuidad de las escuelas infantiles.
13. Creemos que el Gobierno está obviando el riesgo de extinción de una clase media cada vez más empobrecida y de una juventud con más dificultades para desarrollar su proyecto vital. Si el 90% de las familias declara haber perdido poder adquisitivo, el precio de los alimentos ha crecido diez veces más que el salario medio o los jóvenes ven imposible su emancipación, el triunfalismo económico se convierte en un insulto a los españoles. **Nos negamos a aceptar que España se convierta en un país de subsidios donde el más común de los salarios sea el salario mínimo y ofrecemos una alternativa que mejore la competitividad y la atracción de inversiones, para lograr que las empresas y autónomos puedan subir sueldos, bajar impuestos y devolver la prosperidad a las rentas medias.**
14. Para lograr lo anterior, **consideramos imprescindible recuperar la lealtad institucional entre las distintas administraciones**, rota a día de hoy. Reconocemos la importancia de estos encuentros para garantizar la colaboración que el Gobierno central ignora o bloquea actualmente y, además de renovar los acuerdos alcanzados en las reuniones anteriores, celebradas en Córdoba y Asturias, fijamos posiciones y objetivos comunes en los asuntos que figuran a continuación.

ANEXO: ACUERDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

I. IGUALDAD

1. Manifestamos el más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista y nuestra **gran preocupación por el retroceso que se ha producido en los últimos años en materia de igualdad**. La última manifestación de ello –los fallos en los dispositivos telemáticos de control de agresores–, es de extraordinaria gravedad, y se suma a demasiadas negligencias y conductas contra la seguridad de las mujeres y los niños (casi 1.500 rebajas de condena y excarcelaciones hasta el momento, aunque esta cifra lleva meses sin actualizarse), el amaño de los puntos violetas, el consumo de prostitución con fondos públicos por parte de miembros del Ejecutivo socialista o presuntas situaciones de acoso en La Moncloa.
2. Reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres que sufren violencia machista, que han tenido la valentía de denunciar y cuya situación extremadamente vulnerable no admite ningún fallo. Dentro de nuestras respectivas competencias, les **ofrecemos nuestro compromiso con una actuación inmediata ante cualquier defecto en las medidas de control, seguimiento y vigilancia de los maltratadores**.
3. Tal y como ha hecho también el Congreso de los Diputados, **exigimos la depuración de responsabilidades y la inmediata destitución de la ministra de Igualdad**, como responsable directa de la gestión negligente del sistema COMETA y por haber hecho caso omiso durante meses a todas las advertencias acerca de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual. Del mismo modo, pedimos que se aclaren las responsabilidades de los ministros de Interior y Justicia en esta crisis.
4. **Exigimos al Gobierno una auditoría externa, independiente, integral y transparente**: cómo se tramitó y adjudicó el contrato del sistema COMETA, cómo se implantó, qué seguimiento se ha hecho y cómo está funcionando en la actualidad. Asimismo, solicitamos que comunique de forma inmediata a las Comunidades Autónomas información completa e inmediata sobre los defectos y mal funcionamiento del sistema.
 - Número de víctimas afectadas de cada provincia.
 - Número de procedimientos judiciales alterados o sobreesidos en cada provincia por causa de las deficiencias.
 - Tipología de fallos detectados (localización, cobertura, manipulación de dispositivos, etc.).
 - Duración real de las incidencias y protocolos de respuesta activados.

II. INMIGRACIÓN

1. **España vive una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia reciente:** casi uno de cada cinco habitantes ha nacido en el extranjero. En solo cuatro años, la población extranjera ha aumentado en más de 1,5 millones de personas, hasta llegar a los 7 millones de personas (un 14% del total) mientras que la población nacida en España se reduce. Europa entera afronta este desafío, con gobiernos de muy distinto signo reforzando el control de fronteras, los requisitos de permanencia y la integración.
2. **Nuestro país no puede seguir atrapado en el modelo disfuncional del Gobierno central, que ha convertido la irregularidad en la vía más rápida,** debilitando la cohesión social y la igualdad ante la ley. El Partido Popular plantea una política migratoria que alinee España con la tendencia europea: ordenada, legal y mutuamente beneficiosa. La inmigración bien gestionada es una oportunidad; mal gestionada, una fuente de división y precariedad. Queremos demostrar que España siempre ha sido una Nación abierta, fuerte y cohesionada, que acoge a quienes respetan nuestras leyes y valores, y que es firme contra quienes ponen en riesgo la convivencia y la libertad.
3. **El Ejecutivo ha renunciado a controlar las fronteras y niega a los españoles la capacidad de decidir quién entra en nuestro país y en qué condiciones.** El abuso fraudulento de trámites para lograr prestaciones y de las vías de regularización excepcionales, como el arraigo, junto al colapso del sistema de asilo y la ausencia de sistemas de retorno efectivos, han roto los incentivos a quien quiere cumplir, premiando la irregularidad frente a la legalidad. Al mismo tiempo, se ha disparado la dependencia del sistema: altas tasas de desempleo entre extranjeros, precariedad laboral y un uso creciente de las prestaciones sociales, sin que sea necesario demostrar una aportación previa al sistema.
4. **Falta una política migratoria eficaz** y esto no se soluciona ni con la política inmovilista de “que entre quien quiera” ni con el “hay que echarlos a todos”. Sin una respuesta clara, los sistemas de protección se tensan y la confianza de los ciudadanos se resquebraja.
5. La magnitud del cambio demográfico exige una **integración efectiva para que la diversidad cultural, que puede ser una fuente de riqueza y dinamismo, no se convierta en un factor de fragmentación.** La cohesión cultural no significa uniformidad, sino asegurar que todos compartamos un marco común de valores, normas y convivencia que haga posible una sociedad abierta y cohesionada.

6. **El Partido Popular defiende una visión liberal y europea de la inmigración, basada en la dignidad de la persona, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley.** El inmigrante no es ni víctima pasiva ni culpable por defecto: es una persona con derechos y deberes, capaz de prosperar con su esfuerzo y que debe respetar las reglas comunes. Proponemos un modelo de integración asentado en la Constitución, la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de la libertad y la vida, y el respeto a la convivencia democrática y la ley.
7. **Orden y legalidad. Recuperar el control de las fronteras es condición básica de credibilidad.** España debe decidir quién entra y en qué condiciones. Ninguna vía irregular puede ser más ventajosa que la legal. Para ello, el PP propone reforzar el control, combatir a las mafias, garantizar retornos efectivos, y asegurar acuerdos con países de origen y tránsito. La frontera sur de Europa debe contar con más medios, presencia reforzada de Frontex y una política común de retornos que dé seguridad a los ciudadanos y confianza a quienes llegan de forma regular.
8. **Contribuir tiene que ser condición para permanecer.** La inmigración solo es sostenible si se vincula a la aportación real. Queremos vías legales, rápidas y claras para quienes quieran trabajar y cotizar. La residencia de larga duración no puede depender solo del tiempo, sino del esfuerzo laboral y la capacidad de subsistencia. Igualdad de derechos implica igualdad de deberes: la inmigración debe ser una palanca de cohesión, confianza y progreso compartido, no una carga para el sistema. Las prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital deben ligarse a la búsqueda activa de empleo. La mera percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en un medio de vida. Los que abusan no pueden oscurecer la labor de tantas personas llegadas de otros países, que en las últimas décadas han prosperado fruto de su esfuerzo y han contribuido a que España también lo haga.
9. **Integración con exigencias.** La integración es un resultado, no un punto de partida automático. Supone aprender el idioma, conocer la Constitución y respetar valores esenciales: igualdad, libertad y cumplimiento de la ley. Una integración efectiva enriquece nuestra sociedad, aporta talento y refuerza la economía; sin ninguna exigencia, se convierte en una fuente de división.
10. **La nacionalidad española no puede ser un mero trámite administrativo,** sino la culminación de un proceso de integración lingüística, cultural y económica que refuerce nuestro proyecto común. En este camino, reconocemos el vínculo especial que nos une con las naciones hermanas de **Hispanoamérica**, con quienes compartimos lengua, historia y valores, y cuya integración en España constituye una oportunidad natural de enriquecimiento mutuo.

11. **La gestión de los menores no acompañados no puede ser el fruto de un reparto arbitrario y sin transparencia, y mucho menos instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas.** El Gobierno central debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de su fracaso en la política migratoria también en este ámbito. Por ello, volvemos a exigir que garantice la determinación de edad y que asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual saturación de los recursos de las Comunidades. Además, consideramos que, siempre que existan datos que lo permitan, debe promover el retorno y la reunificación familiar en los países de origen.
12. **Tolerancia cero con el delito.** El respeto a la ley es la base de la convivencia. Ningún delito puede quedar impune, sea cometido por inmigrantes regulares o irregulares, al igual que el resto de ciudadanos españoles. La pérdida de residencia debe ser automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves y la reincidencia no puede ser compatible con la permanencia en España. La seguridad de los ciudadanos exige una política clara, firme y previsible, que refuerce la confianza en la justicia y garantice que quien viene a España lo hace para convivir en paz y respetar nuestras normas.
13. Todas las Comunidades Autónomas lideradas por el Partido Popular vamos a trabajar por una España abierta y cohesionada, donde la inmigración sea un factor de prosperidad compartida y no de fractura social. Ese es el camino más directo hacia **una Nación segura, solidaria y fuerte en Europa**. Nos adherimos al acuerdo firmado en Canarias por nuestro presidente nacional el 10 de septiembre de 2024 y nos comprometemos a implantarlo desde el Gobierno central.

III. TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍA

1. **Denunciamos el caos ferroviario que sufren millones de españoles en su día a día:** trenes que no llegan, servicios cancelados, líneas de cercanías colapsadas o suspendidas, y retrasos permanentes en la alta velocidad y en los corredores transeuropeos. La falta de inversión y de planificación convierte al ferrocarril en un símbolo de la desidia, la incapacidad y la decadencia del Gobierno central y en un lastre para la movilidad, la competitividad y la vida de millones de personas. El tren debe volver a ser un orgullo para nuestro país, nos exigiremos agilidad en las reformas para paliar la situación actual y recuperar la confianza de los ciudadanos. Para ello, entre otras cosas, recuperaremos las indemnizaciones por retrasos en los trenes de media, larga distancia y la Alta Velocidad que ha recortado este Gobierno y elaboraremos un plan de contingencia frente a situaciones de urgencia o emergencia para los pasajeros.
2. **El Partido Popular defiende una visión de las infraestructuras y el transporte que garanticen la cohesión social y el equilibrio territorial,** con una perspectiva centrada en **la comodidad, la seguridad y la confianza de los ciudadanos.** La ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la inacción del Gobierno, que ha permitido la acumulación de déficits históricos, no ha dejado de agravar esta situación. Nos comprometemos a corregir las deficiencias desde el Gobierno y restaurar la calidad y credibilidad de los servicios públicos.
3. **Constatamos la parálisis e incapacidad de la acción ejecutiva del Gobierno central y su nula gestión del día a día.** Mientras España sufre un déficit de inversión pública (2,6% del PIB) que nos sitúa por debajo de la media de la Unión Europea (3,6%), el Ejecutivo continúa enfrascado en sus problemas internos y en la utilización partidista de las instituciones y de los fondos europeos, sin abordar las necesidades urgentes de transporte, agua, energía, vivienda o digitalización.

4. **Reclamamos la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructuras**, que garantice estabilidad y seguridad jurídica, planifique y establezca las prioridades para la inversión en infraestructuras y que se diseñe de forma coordinada y consensuada con comunidades autónomas y entidades locales. No es aceptable que decisiones estratégicas se adopten con criterios partidistas o tendenciosos, ni que las inversiones se utilicen como moneda de cambio en pactos políticos para privilegiar a unos frente a otros. Tal y como ya hizo en la Comunidad Valenciana con la presentación del Plan Valencia, **el presidente nacional se compromete a presentar antes de las elecciones generales una propuesta detallada en infraestructuras para cada una de las Comunidades y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; así como a informar, una vez que lleguemos al Gobierno, cada tres meses de la evolución en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructuras.** Recuperar la credibilidad del Ministerio después de la absoluta degradación a la que lo ha sometido el sanchismo pasa por recuperar la gestión, pero también la transparencia y la rendición de cuentas.
5. **Lamentamos el abandono del Gobierno central a los municipios de la España rural, así como a las provincias con menor población.** El Partido Popular, como primer partido de España, conoce bien la realidad de cada rincón de nuestro país, así como las insuficiencias en materia de movilidad que tienen los españoles residentes en pequeños municipios. En consecuencia, denunciaremos el grave impacto que tendrá el nuevo mapa concesional estatal del autobús que, realizado a espaldas de las comunidades autónomas, ignora la realidad demográfica y la dispersión poblacional. Prueba de esta indolencia hacia la realidad territorial de España es que el Gobierno lleva desde 2022 sin reunir a la Conferencia Nacional de Transportes, cuestión a la que le urgimos.
6. De la misma manera, advertimos de las consecuencias de la mala planificación de la empresa pública AENA. Al tiempo que debería reducir el colapso en las terminales más transitadas, **exigimos al Gobierno central medidas que eviten los recortes de rutas en los aeropuertos periféricos y en los de menor tráfico**, ya que agravan su desconexión, con severo impacto en el turismo y en los empleos directos e indirectos.
7. **El Gobierno ha bloqueado reformas imprescindibles en la contratación pública**, lo que genera retrasos en la ejecución de infraestructuras fundamentales, costes adicionales y una pérdida de competitividad para el país, las empresas y los ciudadanos. **Es urgente modernizar la Ley de Contratos del Sector Público.**

8. **Denunciamos la falta de planificación y la arbitrariedad en el ámbito de las infraestructuras eléctricas de transporte y distribución.** El caos normativo y la política energética ideologizada provocan el colapso del sistema, como se puso de relieve durante el apagón. Medidas como el cierre de las centrales nucleares, contrarias a la dirección del resto de países europeos, lastran el desarrollo de nuestra economía. Y a ello se suma la arbitrariedad en el reparto de las inversiones adicionales en transporte de la energía, a la que nos oponemos y que nos comprometemos a revertir. Seguir primando a unas Comunidades sobre otras compromete proyectos millonarios y miles de puestos de trabajo en las autonomías agraviadas.

IV. DEFENSA DEL SECTOR PRIMARIO

1. El sector primario atraviesa un momento especialmente complejo y necesita certidumbre para afrontar el futuro con garantías. Resulta imprescindible que las políticas europeas y nacionales reconozcan el papel esencial que desempeñan los agricultores, ganaderos y pescadores en nuestra sociedad, como garantes de la alimentación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestros territorios. Al mismo tiempo, debemos avanzar en medidas que incrementen la rentabilidad de su actividad, refuercen el atractivo de esta profesión y aseguren que puedan prosperar, innovar y seguir aportando sus numerosos beneficios a la ciudadanía. Solo así lograremos garantizar el relevo generacional y consolidar nuestra soberanía alimentaria, hoy y en el futuro.
2. **El Partido Popular reitera su compromiso con la defensa y el orgullo por nuestro sector primario** que conforman la agricultura, la ganadería, la pesca y el sector forestal, todos ellos sectores estratégicos para el desarrollo económico. Queremos un mundo rural y un litoral vivos, productivos y competitivos, y por ello nos comprometemos a impulsar las reformas normativas que necesitan, ejecutar inversiones clave para ganar en competitividad, así como emprender todas aquellas acciones necesarias en todos los niveles administrativos para lograrlo. **En este sentido, las Comunidades gobernadas por el Partido Popular se suman con esta firma a la elaboración del Libro Blanco del sector primario** que anunció el Presidente nacional el pasado 14 de septiembre.
3. **Exigimos una defensa de la Política Agraria Común y la Política Pesquera Común por parte del Gobierno.** Manifestamos nuestra disconformidad con las reformas de la PAC y la PPC por parte de la Comisión Europea. Pedimos al Gobierno central que ejerza su potestad, a través del Consejo europeo, para obtener un presupuesto suficiente, independiente y ajustado a la inflación, sin que modifique la estructura actual de la PAC, siendo igualmente importante garantizar las inversiones y los fondos de cohesión para el mundo rural y aquellas que recogían el fondo FEMPA (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca), a fin de avanzar en el reto de modernización del sector pesquero y acuícola.
4. **Reduciremos la maraña burocrática a la que se enfrentan nuestros productores. Necesitamos un Plan de Simplificación Administrativa** de calado que reduzca trámites innecesarios y duplicidades. Del mismo modo, nos comprometemos a impulsar políticas que faciliten la digitalización y la productividad de nuestras explotaciones y flotas, con el desarrollo de nuevas tecnologías. Demandamos también un compromiso firme con la simplificación de la PAC y la PPC.

5. **El sector primario también sufre la asfixia fiscal del Gobierno.** La fiscalidad es un instrumento esencial para garantizar el equilibrio, la justicia territorial y afrontar el reto de la despoblación. Por ello, nos comprometemos a seguir reduciendo impuestos desde las Comunidades y a aprobar desde el Gobierno la Ley de Fiscalidad Agraria para reconocer al sector como estratégico y que favorezca el emprendimiento rural.
6. **Insistimos en la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua que determine la planificación hídrica como una política de Estado.** Las infraestructuras hídricas, que se concretarán en un capítulo específico del Plan Nacional de Infraestructuras anteriormente citado, son un pilar irrenunciable de la sostenibilidad y del futuro del medio rural, junto con los avances en las técnicas de regeneración y reutilización del agua. Con visión de estado, inversión y gestión lograremos agua para toda España y conseguiremos que sea un elemento vertebrador para nuestro país. En el ámbito de los regadíos, es necesario seguir apostando por una política de modernización y la aplicación de innovaciones que permiten una reducción energética y huella hídrica.
7. **Reivindicamos que un monte productivo es un monte protegido.** Las Comunidades gobernadas por el Partido Popular participarán de la elaboración e implantación de un Plan Integral para el sector forestal, con una amplia batería de reformas de la legislación actual, así como el fomento de la inversión en innovación y mantenimiento. También apostaremos por el desarrollo de políticas que favorezcan las actividades tradicionales de la silvicultura, pastoreo conducido, la ganadería extensiva, la actividad cinegética sostenible, ya que todas ellas son aliados para combatir el cambio climático y la prevención de incendios forestales, al tiempo que garantizan la actividad económica y el empleo en las zonas rurales apostando por la fijación de la población rural al territorio.
8. **El sector primario necesita un impulso decidido a la competitividad,** que pasa por garantizar la rentabilidad de las explotaciones, acompañada de una apuesta firme por la innovación, la digitalización y la conectividad rural. Manifestamos la necesidad de velar por un precio justo en la cadena alimentaria y exigimos la implantación de las cláusulas de salvaguarda y de reciprocidad en todos los acuerdos comerciales con terceros países, así como el refuerzo del control en frontera.

9. **Reivindicamos que no hay mayores garantes de la sostenibilidad de la tierra y del mar que quienes viven de ella.** Sigue siendo un objetivo fundamental y queremos potenciarla regulando la participación de agricultores y ganaderos en el mercado del CO2, que permitirá valorar el efecto del impacto ambiental del sector en su conjunto e incentivar prácticas que aumenten la captación de CO2. Asimismo, queremos impulsar la Bioeconomía Agroalimentaria y simplificar las normas ambientales nacionales y regionales que no estén adaptadas al territorio. Las políticas de protección del lobo y de protección de los ganaderos deben ser compatibles. Limitar una de ellas en detrimento de la otra es un error en el que se empecinan quienes desconocen la realidad del medio rural. Debe cumplirse la directiva europea igualando el estatus del lobo al norte y sur del Duero.
10. **Debe garantizarse que vivir del medio rural sea una actividad rentable y avanzar en su profesionalización.** Defendemos que la solución debe partir de una doble estrategia: por un lado, dar prioridad al empleo de trabajadores nacionales, jóvenes y desempleados del medio rural; y por otro, establecer un sistema ordenado y seguro de contratación en origen de migrantes temporales, adaptado a las necesidades reales del sector. Del mismo modo, **impulsaremos la Ley Nacional para el Relevo Generacional** que permita dar una respuesta integral a jóvenes, nuevos agricultores, ganaderos y pescadores, mujeres y emprendedores en zonas despobladas. Durante los 5 primeros años de actividad, los jóvenes que se incorporen al sector primario tendrán la fiscalidad más atractiva de Europa.
11. Una gran parte de los municipios de España se está despoblando ante la pasividad del Gobierno Central, que no invierte lo suficiente ni presta atención a las necesidades del mundo rural, perdiendo con ello un importante capital humano, económico, cultural y turístico. Desde el Gobierno central, nos comprometemos a contribuir a su dinamización.

En Murcia, a 28 de septiembre de 2025

Miguel Marín Cobos

Alejandro Ramírez Hurtado

Alfonso Fernández Mañueco

Isabel Díaz Ayuso

Margalida Prohens Ribo

María Guardiola Martín

Manuel Domínguez González

Jorge Azcón Navarro

Carlos Mazón Guixot

Fernando López Miras

Gonzalo Capellán de Miguel

María José Sáenz de Buruaga

Juanma Moreno Bonilla

Alfonso Rueda Valenzuela

Alberto Núñez Feijóo

